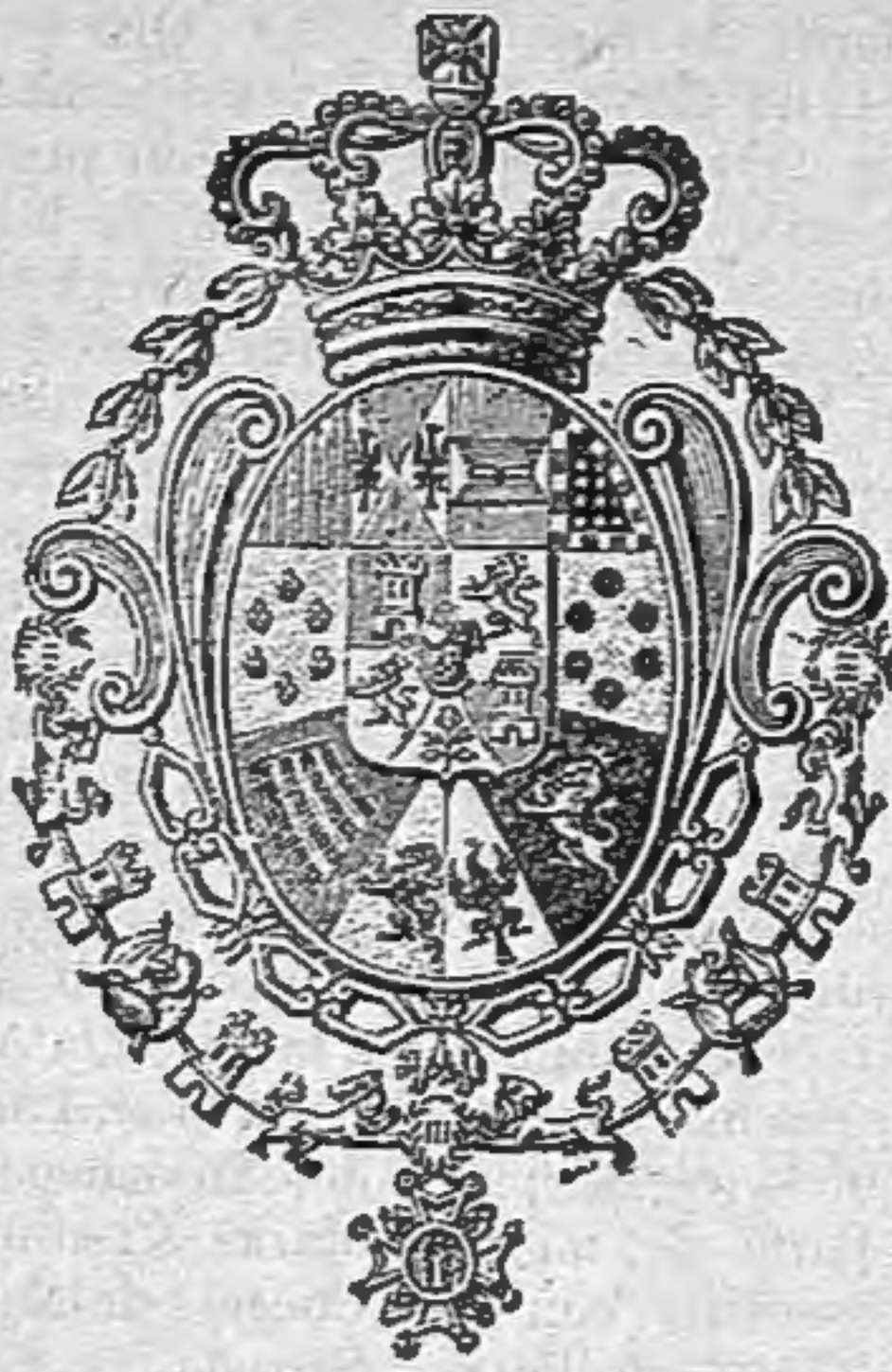


CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas.

Un año dentro y fuera
de la capital 10
Un semestre id. id. . . . 6
Un trimestre id. id. . . . 4
Números sueltos. 0'25
Se publica todos los días
excepto los domingos.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la Gaceta. (Artículo 1.º del Código civil.)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey, la Reina Regente (q. D. g.), y Augusta Real Familia, continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

REALES DECRETOS

(Conclusion)

Que sustanciado el conflicto, el Juez dictó auto declarándose competente, alegando: que si bien aquel Juzgado municipal, por auto de 30 de Octubre de 1891, se inhibió del conocimiento de este asunto, por creerlo de la competencia de la Administración, dicho auto fué revocado por el Superior jerárquico y en justa obediencia a lo por él mismo mandado, se estaba en el caso de aceptar su resolución y sostener la competencia promovida:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 172 de la ley municipal, según el cual, los que se crean perjudicados en sus derechos civiles por los acuerdos de los Ayuntamientos, haya sido o no suspendida su ejecución en virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores, pueden reclamar contra ellos, mediante demanda ante el Juez o Tribunal competente, según lo que, atendida la naturaleza del asunto, dispongan las leyes.

Considerando:

1.º Que la presente contienda de competencia se ha suscitado con motivo del juicio verbal promovido por D. Claudio Llada en reclamación de una servidumbre de aguas que se le había destruido al recomponer los caminos rurales de la parroquia de Sales, en virtud de acuerdo del Ayuntamiento y de la Junta de interesados de dicha parroquia.

Véase el número anterior.

2.º Que tal reclamación versa sobre un derecho de índole civil, y los que se crean lesionados en tales derechos pueden deducir sus reclamaciones ante el Tribunal competente, con arreglo a las leyes.

3.º Que tratándose de hacer declaraciones sobre propiedad o dominio, o de los derechos que limiten la plena propiedad de los bienes, es indudable que sólo a los Tribunales del fuero común corresponde conocer de tales cuestiones:

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia a favor de la Autoridad judicial.

Dado en Palacio á treinta de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—
Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador civil de la provincia de Oviedo y el Juez de instrucción de Pola de Labiana, de los cuales resulta:

Que habiendo tenido conocimiento la Guardia civil del puerto de Cabañeta de que se había hecho una corta de árboles en los montes comunes denominados Ajo, Gumial, Brafia y Rodales, del término de Collanzo, se constituyeron los guardias en dichos montes y encontraron cortadas 32 hachas y repartidos en varias chozas, unos cortando las maderas y otros haciendo almadreñas, á José Gonzalez Ureña, José Alvarez Fernandez, Mauricio Miranda Gonzalez y otros doce, vecinos todos de Casomera y Rio de Aller, quienes fueron detenidos y puestos á disposición del Alcalde de este último pueblo, juntamente con 18 pares de almadreñas y 10 hachas, dos taladros y otras herramientas; que comprobados algunos de los árboles cortados, coincidían con los tocones; no solo en el corte, sino tambien en la época de éste, habiendo confesado los detenidos á los guardias que ellos las habían cortado.

Que denunciados los hechos referidos al Juez de instrucción de Pola de Labiana, se mandó instruir por el mismo el correspondiente sumario por

auto de 14 de Octubre de 1891, y hallándose practicando las diligencias pertinentes, fué dicho Juzgado requerido de inhibición por el Gobernador civil de la provincia de Oviedo, á instancia del Alcalde de Aller, y de acuerdo con la Comisión provincial, fundándose la Autoridad administrativa en que á los Tribunales ordinarios no competía entender en el asunto, porque según lo dispuesto en los párrafos cuarto del art. 10 y segundo del art. 40 y regla 3.ª de este mismo artículo del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, solo serán de su competencia cuando los productos hubieran sido extraídos del monte con ánimo de lucrarse, ó el daño ocasionado en ellos excediera de 2.500 pesetas; en que según manifestaba en su informe el Ingeniero Jefe de montes el valor de las maderas que cortaron los denunciados era de 48 pesetas 50 céntimos, y la multa que debía imponerse á cada uno de ellos era de 4 pesetas 10 céntimos; y en que por la cuantía de la multa que debía ser impuesta, la Administración era la única competente para hacerlo en vista de lo que resultaba del oportuno expediente; el Gobernador citaba, además, los artículos 1.º y 4.º del Real decreto de 8 de Mayo de 1884 y 2.º 5.º y 6.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que sustanciado el incidente, el Juez dictó auto declarándose competente, alegando: que los hechos que como justiciables se perseguían en el sumario, podían constituir el delito de hurto, según la definición del artículo 530 del Código penal, por lo menos en sus grados de delito frustrado ó tentativa, toda vez que al hacer las almadreñas, es indudable que los procesados perseguían la idea de lucrarse, siendo de la competencia de los Tribunales ordinarios el conocimiento de esta clase de delitos; que aunque el art. 40 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884 atribuye competencia á los Gobernadores y Alcaldes para conocer de las denuncias, imposición y exacción de las multas y demás responsabilidades prescritas en el citado Real decreto, sin embargo, en la regla 4.ª del art. 40 se dispone que cuando la infracción de un precepto de las leyes y disposiciones vigentes que tengan penalidad señalada, haya sido el medio de perpetrar un delito definido en el Código penal, se reser-

vará su castigo á los Tribunales, lo cual tenía lugar en el caso presente, hallándose tambien exceptuado por las disposiciones del art. 4.º del mismo Real decreto.

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 4.º del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, que dice: «El que cortare ó arrancare árboles, leña gruesa ó ramaje, cepas ó tocones, será castigado con una multa igual al valor de los productos decomisándose éstos. Además, indemnizará los daños y perjuicios.»

Visto el art. 40 del mismo Real decreto, que dice: «Son Autoridades competentes para conocer de las denuncias, imposición y exacción de las multas y demás responsabilidades previstas en los artículos anteriores, los Gobernadores civiles de las provincias y los Alcaldes, con sujeción á las reglas siguientes:

«Las multas y demás responsabilidades relativas á la roturación, corta, venta ó beneficio de aprovechamientos forestales, sin la autorización competente, al modo ó tiempo de efectuar dichas operaciones, y á las infracciones que se cometan de las reglas establecidas para la celebración de las subastas, serán impuestas por los Gobernadores.

«Las multas y responsabilidades pecuniarias de las demás clases de infracciones serán impuestas por los Alcaldes, cuando no excedan del límite para que les faculta la ley Municipal.

«Las que excedan de dicho límite deberán ser impuestas por los Gobernadores.

De los daños causados en los montes públicos, cuyo importe exceda de 2.500 pesetas, conocerán los Tribunales de justicia, con arreglo á las prescripciones del Código penal.»

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba la Autoridad administrativa decidir alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribuna-

es ordinarios ó especiales hayan de pronunciarse:

Considerando:

1.º Que el hecho que ha dado lugar á la formación del proceso de que se trata consiste en haber sido aprehendidos en los montes comunes de Collanzo José González, José Alvarez, Mauricio Miranda y otros 12 vecinos, todos de Casomera y Rio de Aller, que habían cortado maderas de haya y estaban construyendo almadreñas.

2.º Que el importe de las maderas y de los daños causados no llega, ni con mucho, según resulta de los antecedentes, á 2.500 pesetas, correspondiendo, por lo mismo, su castigo á la Administración.

3.º Que se está, por tanto, en uno de los casos en que, por excepción pueden los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno; en nombre de Mi Augusto hijo el Rey don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Palacio á treinta de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—
María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(G. núm. 46).

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Lugo y el Juez de primera instancia de aquella capital de los cuales resulta.

Que en escrito de 10 de Febrero de 1892, dirigido al Juez municipal de Lugo, Domingo Dovesa Cela demandó en juicio verbal á Domingo Fernandez Fandiña, José Fernandez Torres y Manuel Fernandez, alegando; que los demandados y sus familiares habían pasado siempre con sus caballerías para Lugo por el camino que existe á la parte superior del monte de la propiedad del demandante llamado de Cotori, do Zarra, do Paraxon; que sin embargo de que Domingo Fernandez Fandiña y Manuel Fernandez habían pedido al demandante por favor que les permitiese pasar por el medio del monte, no accedió á esta pretension, propasándose hacia algunos dias los demandados, por medio de sus hijos y criados, á pasar con las caballerías por el medio de dicho monte, sin que tengan los referidos demandados derecho de posesion para pasar por el expresado punto; que las servidumbres deben ejercitarse por el mismo sitio y en la misma forma en que se hallan constituidas; y terminaba suplicando se condenase á los demandados á que se abstuvieran por sí y por medio de sus familiares de atravesar con las caballerías por el medio del monte de la propiedad del actor, de que queda hecho mérito, y á que lo verifiquen por la parte superior del predio, según antigua costumbre.

Que sustanciado el juicio, dictó sentencia el Juez municipal, estimando las pretensiones de la demanda, y apelada esta sentencia se elevaron los autos al Juzgado de primera instancia.

Que sustanciándose la apelacion antes expresada, el Alcalde pedáneo de la parroquia de San Miguel de Orberay, acudió al Gobernador de la provincia para que esta Autoridad suscitara al Juzgado la oportuna competencia; como así lo hizo, previo informe del Ingeniero Jefe de Montes y de acuerdo con la Comisión provincial, fundándose en que aparte del derecho que corresponda á los vecinos de Orberay en el uso y aprovechamiento del monte Costa de Orberay, y en ca-

da una de las porciones de que es compone, entre ellas la do Cotori, do Zarra, do Paraxon, que deben ser fijados por la Junta de administración, que establece la vigente ley municipal existe en el presente caso la necesidad de la resolución por la Administración de una cuestión previa, que es la decisión del expediente de excepción de la venta pendiente en el Ministerio de Hacienda; en que á la Administración corresponde también determinar el estado de posesion de los montes públicos, su demarcacion, uso, aprovechamiento y demas, debiendo solo entender á jurisdiccion ordinaria despues de la oportuna declaracion administrativa; en que la separacion que por medio del indicado juicio verbal pretende hacerse de la parte de monte Costa de Orberay, conocido con el nombre do Cotori, do Zarra, do Paraxon aunque solo se extienda al hecho posesorio de su uso, implicaria la determinacion, radio ó perimetro que aquel abarque, y citaba el Gobernador los artículos 90 y siguientes de la ley Municipal, el 40 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, las Reales ordenes de 22 de Junio de 1875 y 4 de Abril de 1883, y los artículos 2.º, 3.º y 5.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que sustanciado el conflicto, el Juez dictó auto declarándose competente alegando: que en el juicio verbal promovido por Domingo Dovesa Cela no se trata de ninguna clase de aprovechamiento ni de corregir ninguna de las infracciones é que se refiere el Real decreto de 8 de Mayo de 1884, reformativo de la legislacion penal de Montes, y si unicamente de resolver el sitio por donde ha de ejercitarse una servidumbre de carácter privado; que de la compulsa practicada que obra en este juicio resulta comprobado que el monte do Cotori, do Zarra, do Paraxon, no se halla comprendido en la relacion de los montes públicos no exceptuados de la venta hasta 1.º de Enero de 1889, en la que bajo el número 76 de aquel término figura el de Costa de Orberay; que sean cualesquiera los títulos que los interesados invoquen para hacer ó dejar hacer uso de la servidumbre en cuestion, sus títulos, como limitativos del dominio pleno de las fincas, solo puede apreciarse por los Tribunales de justicia, que son los únicos competentes para ello:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 11 del reglamento de Montes de 17 de Mayo de 1865, según el cual, mientras no sean vencidos en el juicio competente de propiedad los pueblos y las Corporaciones administrativas que se hallen en posesion de un monte, se mantendrá ésta por el Gobierno ó por los Gobernadores como si no se hubiera deducido reclamacion alguna:

Considerando:

1.º Que la presente contienda de competencia se ha suscitado con motivo del juicio verbal promovido por Domingo Dovesa Cela á consecuencia de actos ejecutados por varios vecinos del mismo en un monte que el demandante dice ser de su propiedad:

2.º Que no consta el estado posesorio de dicho monte á favor de ningún pueblo ni Corporacion administrativa, y mientras esa posesion no se halle constituida no puede privarse á los particulares del ejercicio de los derechos de propiedad que sobre tal monte se invocan, toda vez que esos derechos no aparece que hoy sean litigiosos, ni que esten constituidos á favor de la Administración.

3.º Que por tanto y sin perjuicio de los derechos que esa misma Administración pueda ejercitar en su día, la cuestion litigiosa lo es hoy entre el que se dice propietario del monte y los particulares que supone le han perturbado en esos derechos, asunto de índole puramente civil, cuyo conocimiento corresponde á los Tribunales del fuero comun;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial.

Dado en Palacio á veinte de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—
María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(G. núm. 45).

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador de la provincia de la Coruña y el Juez de instruccion de Carballo, de los cuales resulta:

Que D. Miguel Moreira Fernandez acudió en 1.º de Septiembre de 1884 al Ayuntamiento de Laracha solicitando que se le permitiera colocar un muro que cerrara en todas sus direcciones el terreno que habia adquirido del Estado en las inmediaciones de la feria de Payosaco y lugar del mismo nombre, de 950 metros cuadrados de extension superficial, lindante por Oeste con bienes de Ramon Fulgar, Norte carretera pública de la Coruña Carballo y otras partes; Este y Sur camino vecinal de la parroquia de Coiro á la referida feria de Payosaco, en medio de bienes de D.ª Carmen Perez; solicitó á la que, previa instruccion de expediente, accedió el Ayuntamiento de Laracha en 4 de Noviembre del expresado año, acordando que el cierre se ajustara á las condiciones determinadas por la Comisión especial nombrada por la Corporacion municipal.

Que en 12 de Abril de 1885 se otorgó por el Juez de primera instancia de Carballo, á nombre del Estado y á favor de D. Miguel Moreira, escritura de venta de un terreno procedente de bienes nacionales de última calidad, al sitio del lugar de Payosaco y feria del mismo nombre, parroquia de Leiton, término municipal de Laracha, de cabida 950 metros cuadrados, lindantes por el Este con el camino vecinal que conduce de la parroquia de Coiro á la citada feria de Payosaco y otros puntos; al Oeste carretera real que de la Coruña conduce á Carballo y otras partes, y al Norte y Sur con otros caminos vecinales, haciéndose constar en la escritura, que habiendo solicitado el comprador Moreira del Ayuntamiento de Laracha autorizacion para construir un muro de piedra y habiéndosele concedido, hubo variado un tanto la descripcion del terreno, formado, á la fecha del otorgamiento de la escritura, por trozos desiguales divididos por el camino de Coiro, describiéndose, con arreglo al plano formado por el Ayuntamiento en la siguiente forma: un terreno destinado á campo á orilla de la carretera que de la Coruña conduce á este pueblo y punto denominado de Payosaco, á inmediaciones de la feria del mismo nombre, hallándose dividido en dos trozos de forma triangular, separados por un camino que dá tránsito de la parroquia de Coiro á la feria de Payosaco, teniendo el trozo pequeño, situado á la parte Este, una extension superficial de 109 metros 86 centímetros cuadrados, y el grande, ó sea el de la parte Oeste, 179 metros 75 centímetros cuadrados, lindando, en conjunto, ambos trozos, al Norte con la carretera pública citada;

por el Sur con el camino referido de Coiro, por lo que respecta al trozo mayor, y en cuanto al menor, la finca de Carmen Perez; por el Este, que es el vértice de uno de los ángulos que constituyen el triángulo del trozo menor, con la referida finca de Carmen Perez, y por el Oeste con el tránsito para el servicio personal en medio de la finca de Ramon Folgar, habiéndose inscrito dicha escritura en el Registro de la propiedad de Carballo:

Que á instancia de varios vecinos de Laracha, acordó el Ayuntamiento instruir un expediente á fin de averiguar si procedia la destruccion del muro levantado por D. Miguel Moreira para cercar la propiedad, y practicadas varias diligencias, la Corporacion municipal acordó, en 22 de Septiembre de 1885, que se verificase la demolicion y destruccion del material de dicho muro dentro de ocho dias, y que si pasaba ese plazo sin que D. Miguel Moreira lo hubiese realizado, se verificase dicha operacion á cuenta del mismo, fundándose ese acuerdo en que el de 4 de Noviembre de 1884 carecia de validez, porque habia cedido un terreno destinado al disfrute del vecindario y de caminos públicos, sin la autorizacion del Gobierno, estando por tanto, adoptado fuera del círculo de las atribuciones del Ayuntamiento y adoleciendo de un vicio de nulidad, y ademas se alegaba como base del acuerdo de que se trata que Don Miguel Moreira habia traspasado los límites de la concesion para el cierre, estrechando los caminos públicos más de lo que permitia la concesion:

Que el Gobernador de la provincia de la Coruña confirmó el acuerdo del Ayuntamiento de Laracha de 22 de Septiembre de 1885, é interpuesto recurso de alzada para ante el Ministerio de la Gobernacion, se dictó en 28 de Noviembre de 1886 una Real orden declarando improcedente el recurso gubernativo interpuesto, por tratarse de un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en asunto de su exclusiva competencia, y en correccion de la extralimitacion cometida por el recurrente Moreira, al hacer uso de la autorizacion que se le habia concedido en 4 de Noviembre de 1884, y en que la providencia gubernativa en que así se consignaba resuelve una cuestion que con arreglo al art. 83 de la ley de 25 de Septiembre de 1863 solo es reclamable en via contencioso administrativa:

Que en 26 de Agosto de 1890, vista la solicitud de varios vecinos de Payosaco para que en el campo donde se celebra la feria pública del mismo nombre, al Este de la carretera general de la Coruña á Finisterre, se les autorizara para colocar provisionalmente leñas, como venian verificándolo, sin perjuicio del tránsito público y de la celebracion de la feria, el Ayuntamiento de Laracha acordó acceder á dicha pretension:

Que ante el Juzgado municipal de Laracha denunció D. Miguel Moreira á D. Francisco Tuset Lema, por haberse permitido colocar pilas de esquileo y madera de pino en un campo perteneciente al denunciante, sito en Payosaco, inmediato á la casa de aquél, y á orillas de la carretera general que sigue á Carballo, campo que habia adquirido Moreira del Estado; y celebrado el correspondiente juicio de faltas, y dictada sentencia absolviendo al denunciado por no haber experimentado daño alguno, según el juicio pericial, la propiedad del denunciante, se interpuso apelacion por D. Francisco Tuset, por haberse declarado competente el Juzgado para conocer del asunto, y por hacerse en la sentencia apreciaciones respecto al dominio del terreno en cuestion, que están en pugna con los acuerdos irrevocables que la Adminis-

tracion tiene adoptados respecto al particular:

Que remitidas las diligencias al Juzgado de Instrucción de Carballo, fué éste requerido de inhibición por el Gobernador de la Coruña, á instancias del Alcalde de Laracha, y oída la Comisión provincial, fundándose en que el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en 26 de Agosto de 1890 lo había sido en asunto de su exclusiva competencia y ejercitando los derechos que la Corporación había recobrado sobre el campo de Payosaco en virtud de un acuerdo de 22 de Septiembre de 1885; en que el conocimiento de las reclamaciones que se hayan producido contra don Francisco Tuset por el hecho de haber utilizado la autorización del Ayuntamiento corresponde á la Administración activa; y por último, en que para apreciar si Tuset debe responder en juicio criminal por los hechos que se le imputan existe una cuestión previa, cual es la de declarar si el denunciado se ha excedido de la autorización que le concedió el Ayuntamiento.

El Gobernador citaba los artículos 72 y 89 de la ley Municipal y el 3.º y 5.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887.

Que tramitado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdicción, alegando que Moreira es dueño del campo de Payosaco en virtud de la escritura pública inscrita en el Registro de la propiedad; que no hay que someter el conocimiento de la falta denunciada á la Administración, ya sea cometida en finca de propiedad particular, ya en una en que el vecindario disfrute de servidumbre pública, ni cabe tampoco cuestión previa, por estar agotada la vía gubernativa una vez dictada la Real orden de 28 de Diciembre de 1886, que puso fin al expediente administrativo; que las cuestiones de propiedad ó de servidumbre son puramente civiles y nada tienen que ver con los asuntos de carácter criminal, y que la jurisdicción ordinaria es competente para conocer de la falta de que se trata.

El Juzgado citaba el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887 y el art. 348 de la ley orgánica del Poder judicial.

Que en 21 de Noviembre de 1891 remitió el Juzgado al Gobernador el correspondiente exhorto, y en 17 de Diciembre de dicho año, y en 8 de Marzo y en 18 de Abril de 1892 le recordó la necesidad en que se hallaba de insistir en el requerimiento ó desistimiento del mismo, sin que el Gobernador contestara al Juzgado hasta el 30 del citado mes de Abril, fecha en la que, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores promover contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Visto el art. 17 del mismo Real decreto, que dispone que el Gobernador, oída la Comisión provincial, y dentro de los tres días siguientes á la recepción del oficio, dirigirá nueva comunicación al requerido, insistiendo ó no en estimarse competente:

Visto el art. 72 de la ley Municipal, que atribuye á la exclusiva competencia de los Ayuntamientos la apertura y alineación de calles, plazas y toda clase de vías de comunicación, y las ferias y mercados, como asimismo la adminis-

tración municipal que comprende el aprovechamiento, cuidado y conservación de todas las fincas, bienes y derechos pertenecientes al Municipio y establecimientos que de él dependen:

Visto el art. 114 de la ley que viene citándose, con arreglo al cual corresponde al Alcalde único, ó primero, en su caso, como Jefe de la Administración, publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento cuando fueren ejecutivos y no mediare causa legal para su suspensión, procediendo, si fuera necesario, por la vía de apremio, é imponiendo multas que en ningún caso excedan de las que establece el art. 77 y arresto por insolvencia:

Considerando:

1.º Que dictada la Real orden de 28 de Diciembre de 1886, que dejó firme el acuerdo en que el Ayuntamiento de Laracha revindicó parte del terreno de que se consideraba dueño don Miguel Moreira, no puede éste alegar haberse disfrutando la propiedad y posesión del campo en que ha tenido lugar el hecho que ha motivado la denuncia de que se trata.

2.º Que el haber depositado don Francisco Tuset alguna leña en sitio que el Ayuntamiento de Laracha tenía como de uso común, puede, caso de constituir una falta, ser castigado por la Autoridad administrativa, por tratarse de una infracción que reviste ese carácter.

3.º Que al depositar D. Francisco Tuset la leña, lo hizo en virtud de la autorización que al efecto había concedido á los vecinos del pueblo el Ayuntamiento, y por consiguiente, á la Administración correspondiente en todo caso; determinar si Tuset se excedió ó no de la expresada autorización;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración, y lo acordado.

Dado en Palacio á veinte de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—
Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(G. núm. 41.)

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador de la provincia de Palencia y el Juez de primera instancia de Baltanás, de los cuales resulta:

Que ante el Fiscal de la Audiencia de lo criminal de Palencia denunciaron D. Victor Torres Niño y D. Simeon Ruiz Calleja, vecinos de la villa de Población de Cerrato, los siguientes hechos: que ya por el Alcalde, ya por el Depositario de fondos municipales, se procedió á la recaudación de un impuesto que se denominaba de pastos, sin que se supiera en qué forma, cuándo, ni cómo se había establecido; presupuesto y repartido, siendo inútiles las gestiones que los denunciantes habían hecho para averiguar la legitimidad de la exacción; que varios vecinos ganaderos de dicho pueblo habían satisfecho la cuota que se les dijo les correspondía por lo repartido para el primer semestre del año económico de 1891-92, por concepto de aprovechamiento de pastos, de montes y vega, gratificación y gastos del capataz, licencias y mesta, recogiendo los oportunos resguardos de pago que no expresaban ni el mes ni el día en que aquél se había verificado, recibos que acompañaban á la demandada; que algunos que se negaron á satisfacer el impuesto habían sido apremiados en expediente incoado por quien ostentaba el carácter de agente ejecutivo; que

según el testimonio del acta notarial, que también se acompañaba á la demanda, ni se había formado expediente para solicitar licencia para aprovechamiento forestal, ni formado repartimiento sobre aprovechamientos de pastos, ni se había expedido nombramiento de Comisionado ejecutivo para hacer efectivos los descubiertos de los repartimientos aludidos, y por último, que los referidos hechos pueden ser constitutivos de delitos de exacción ilegal, comisos por funcionarios públicos, prevaricación y usurpación de funciones:

Que instruido el correspondiente sumario, se hizo constar en él el repartimiento formado por pastos de ratrojeiras, consumidos por los ganados laneros en el término municipal de que se trata, por pastos del monte y gratificación al capataz y gastos con el mismo por la mesta y por las licencias concedidas á los ganaderos, expresándose las cantidades que á cada uno de estos correspondía satisfacer, según el número de reses que tenían:

Que también se unió al sumario el expediente de apremio, incoado contra dos vecinos de Población de Cerrato, á los que se refería la denuncia y que no habían satisfecho el arbitrio de que viene tratándose, y una certificación expedida por el Ingeniero Jefe de Montes del distrito forestal de Palencia, según la cual el Ayuntamiento de Población de Cerrato había ingresado en 27 de Octubre de 1891, 43 pesetas 50 céntimos en concepto de 10 por 100 de la tasación de los pastos que por el plan de aprovechamientos se había concedido á aquella villa en su monte denominado Carralba, con destino al consumo de los ganados del vecindario del mismo:

Que estando el Juzgado practicando las diligencias del sumario, fué requerido de inhibición por el Gobernador de Palencia, á instancias del Ayuntamiento de Población de Cerrato, fundándose la Autoridad gubernativa, de acuerdo con la Comisión provincial, en que el Ayuntamiento, al fijar los ingresos en su presupuesto, había obrado dentro del círculo de sus atribuciones, procediendo contra ese acuerdo recursos gubernativos, y en que mientras no se declare por la Administración que el arbitrio es ó no ilegal, existe una cuestión previa de la cual depende la calificación del delito que se persigue sucediendo lo propio respecto á la malversación de caudales. El Gobernador citaba los artículos 136, 147 al 150 y 171 de la ley Municipal:

Que sustanciado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdicción, alegando que según el testimonio del mismo Alcalde de Población de Cerrato, el repartimiento origen de los hechos denunciados, no ha sido aprobado por Autoridad alguna, y se formó en 22 de Noviembre de 1891, siendo por lo tanto imposible haber cumplido con lo que respecto á ese particular dispone la ley Municipal; que en su virtud hay que reconocer que el arbitrio municipal que, según el oficio de requerimiento consta en el presupuesto, no es el mismo que figura en el repartimiento de 22 de Noviembre; que á la jurisdicción ordinaria corresponde el conocimiento de los hechos derivados del referido repartimiento, deduciéndose así de una sentencia del Tribunal Supremo, por tratarse de un arbitrio indebidamente exigido y no autorizado, y por último, que si bien el proceso no había llegado al período de calificación, debía declararse al efecto de la competencia que los hechos denunciados merecían el concepto de exacción ilegal de impuestos, estafa y usurpación de funciones. El Juez citaba los artículos 147 al 150 de la ley Municipal, 224 al 226 del Código penal, el 14 de la ley de En-

juiciamiento criminal, una sentencia del Tribunal Supremo y los artículos 3.º, 11 y 16 del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento en lo referente á los supuestos delitos de exacción ilegal, estafa y usurpación de funciones, dejando expedida la acción del Juzgado para que siga entendiendo del delito de cohecho consistente en haberse gratificado al capataz de cultivos para que permitiera la entrada de ganados en los terrenos acotados, resultando de lo expuesto el presente conflicto que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores promover contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Vistos los artículos 146 al 153 de la ley Municipal, que establecen los trámites que deben seguirse en la formación del presupuesto municipal, determinando la fecha en que ha de hallarse formado y los recursos gubernativos que en la materia pueden interponerse, estableciendo además que para hacer efectiva la recaudación serán aplicables los medios de apremio en primeros y segundos contribuyentes dictados en favor del Estado:

Visto el art. 1.º de la instrucción de 12 de Mayo de 1888, según el cual, los procedimientos contra contribuyentes y otros responsables para la cobranza de los descubiertos liquidados á favor de la Hacienda pública ó entidad, á la que un contrato especial pudiera subrogar en sus derechos, son puramente administrativos y se seguirán por la vía de apremio, siendo, por tanto, privativa la competencia de la Administración para entender y resolver sobre todas las incidencias del apremio, sin que los Tribunales ordinarios puedan admitir demanda alguna, á menos que se justifique haber agotado la vía gubernativa y que la Administración ha reservado el conocimiento del asunto á la jurisdicción ordinaria:

Considerando:

1.º Que la resolución de la presente contienda jurisdiccional queda reducida á los hechos, respecto de los cuales el Gobernador ha insistido en su requerimiento, y que consisten en haber exigido el Ayuntamiento de Población de Cerrato cierto impuesto á los vecinos de dicho pueblo, incoado contra algunos expedientes de apremio:

2.º Que á la Administración corresponde apreciar si el impuesto de que se trata fué establecido con arreglo á las prescripciones de la ley Municipal, y exigido en la forma que determinan las disposiciones vigentes:

3.º Que la declaración que la Administración haga sobre dichos extremos no puede menos de influir en el fallo que en su día hubieren de dictar los Tribunales:

4.º Que se está, por lo tanto, en uno de los dos casos en que, por excepción, pueden los Gobernadores suscitarse contiendas de competencia en los juicios criminales;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Palacio á treinta de Enero

de mil ochocientos noventa y tres.—
Maria Cristina.—El Presidente del
Consejo de Ministros, Práxedes Mateo
Sagasta.

(G. núm. 47.)

ANUNCIOS OFICIALES

HOSPITAL PROVINCIAL

Estado que se publica en virtud
de la circular del señor Gobernador
inserta en el *Boletín* de 6 de Junio
de 1892, y la cual deben tener muy
presente los Señores Alcaldes y Se-
cretarios, para evitar responsabili-
dades.

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA DE ORENSE

AÑO ECONÓMICO DE 1892-93

Mes de Marzo

Estado demostrativo de los enfermos
civiles de caridad existentes en el
Hospital el día de la fecha, con ex-
presion del número de vacantes que
existen en virtud de lo acordado por
la Comision provincial en sesion de
15 de Marzo último.

Número de camas disponibles,
según el acuerdo. 74
Idem de enfermos de caridad
hasta el día. 71

Vacantes que existen. 3
Orense 15 de Marzo de 1893.—
El Director, Narciso Serantes.

AYUNTAMIENTOS

CHANDREJA

Formado el padron industrial de
esta localidad con arreglo á la preve-
nido en el Real decreto de 23 de Fe-
brero último, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría del Ayuntamien-
to por término de ocho dias, á fin de
que todo habitante pueda hacer du-
rante igual plazo las reclamaciones que
estime convenientes.

Lo que en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 7º del ya citado
Real decreto.

Chandreja Marzo 14 de 1893.—El
Alcalde, Laureano F. Carballo.

JUNQUERA DE ESPADAÑEDO

Por término de 15 dias, á contar
desde que el presente aparezca inser-
to en el *Boletín oficial* de la provincia,
se halla expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento el apén-
dice al amillaramiento que ha de
servir de base al repartimiento de la
contribucion territorial en el ejercicio
económico de 1893 á 94, durante cuyo
plazo podrán los interesados hacer
las reclamaciones que crean justas.

Por igual término y en la misma
Secretaría se hallarán de manifiesto
los presupuestos adicional y refundido
del corriente ejercicio de 1892 á 93 y

el ordinario para el inmediato de
1893 á 94, á fin de que los que les
interese puedan enterarse en el tér-
mino fijado.

Junquera de Espadañedo Marzo
10 de 1893.—El Alcalde, José A. Gon-
zalez.

MASIDE

Los antecedentes relativos al apén-
dice al amillaramiento que ha de ser-
vir de base al reparto de la contribu-
cion territorial del próximo ejercicio
económico de 1893 á 94, se hallarán ex-
puestos al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por el término de
quince dias para los efectos consi-
guientes.

Maside Marzo 10 de 1893.—El Al-
calde, José Castro.

TRIBUNALES

PRIMERA INSTANCIA

D. Antonio Fernandez Cid, Juez de
instruccion de Carballino

Por medio de la presente hago sa-
ber: que á virtud de denuncia de don
Luis Bernardez García, vecino de
Bouzas del Lago, Alcaldía de Maside,
en este partido, en la que manifiesta
que en la noche del 7 al 8 de Febrero
próximo pasado, le fueron hurtados
de una tienda que en dicho pueblo
tiene establecida, los efectos y dinero
que al final se relacionan, me hallo
instruyendo causa criminal, ignorán-
dose quienes puedan ser sus autores.

A la vez ruego y encargo á todas
las autoridades y agentes de la poli-
cia judicial practiquen activas diligen-
cias en busca de dichos efectos y di-
nero, poniendo todo á mi disposicion
caso de conseguirlo con las personas
en cuyo poder se encuentren, si no
justifican en el acto su legítima pro-
cedencia.

Dado en Carballino á 13 de Marzo
de 1893.—Antonio Fernandez Cid.—
De su orden, Jesús Alfeirán Taboada.

Efectos

Tres piezas telas azules de delan-
tales.

Cuatro idem para sayas.

Dos pañuelos de lana grandes con
flec y franjas asedadas, de 22 reales
uno.

De cuatro á cinco de seda de co-
lores.

Ocho paquetes de estambre encar-
nado.

Otro idem de seda negra en ma-
dejas.

Una libra cordon negro.

Otra idem encarnado liso.

Como unas veinte varas de terci-
pelo de cuatro reales una.

Como unos treinta mazos de cigarri-
llos comunes.

Y como sobre 200 reales en plata.

Don Cecilio de Vera y Gomez, Juez
municipal del distrito Norte de esta
ciudad en funciones de primera in-
stancia del mismo distrito y su partido.

Por el presente y á consecuencia del
intestado de D. Francisco Vazquez y
Sampayo, natural de Cedeira, provin-
cia de Orense, soltero, de sesenta y
cuatro años de edad, domiciliado que
fué en el barrio de la Guanábana, tér-
mino municipal de Matanzas, se con-
vocan por término de treinta dias á los
que se considera con derecho á here-
darle, para que se presenten con los

documentos justificativos de su paren-
tesco con el finado, haciendo presente
que los bienes quedados á su falleci-
miento, según declaraciones testifica-
les, consiste en una yunta de buyes,
una yegua mora con su potro moro
azul de dos años y un vale por la
cantidad de sesenta pesos billetes, sus-
crito por D. Bartolomé Romero, en
siete de Marzo de mil ochocientos
noventa y dos y además un peso cua-
renta y tres centavos en plata y calde-
rilla. Y para su insercion en el *Boletín*
de la provincia de Orense libro el
presente. Matanzas trece de Febrero
de mil ochocientos noventa y tres.—
Cecilio de Vera.—Ante mí, Santiago
Castro.

Don José Mosquera Losada, Juez ac-
cidental de primera instancia de
Puebla de Trives.

Hago saber: que en expediente gu-
bernativo seguido á instancia de Don
Alberto Martinez, Registrador interino
que fué de Viana de Bollo, con esta
fecha recayó providencia mandando
citar por medio de edictos que se in-
serte en el *Boletín oficial* de esta pro-
vincia y *Gaceta de Madrid*, cada mes y
durante un semestre, á todos los que
se crean con derecho á deducir alguna
reclamacion contra dicho señor, y por
razon de la fianza que como Registra-
dor interino tiene prestado y cuya
devolucion solicita. Por tanto en cum-
plimiento de lo mandado, se expide
este tercero edicto á los efectos indica-
dos, para que durante el plazo señalado
puedan los interesados reclamar sus
derechos. Si así lo hicieren se les dirá
y administrará justicia, de lo contrario
seguirán las actuaciones su curso, pa-
rándoles el perjuicio consiguiente.

Puebla de Trives trece de Marzo de
mil ochocientos noventa y tres.—José
Mosquera.—De orden de S. S.ª, Do-
mingo J. Peran.

MUNICIPALES

D. Bernardo Carid Martinez, Juez mu-
nicipal de Amoeiro:

Por el presente edicto, se cita, llama
y emplaza á Juan Alonso, de oficio
labrador, vecino que fué del lugar de
Buveiras, parroquia de Cornoces, en
este distrito, hoy ausente en ignorado
paradero, para que á la hora de nueve
de la mañana del día cuatro del pró-
ximo mes de Abril, se presente en la
Audiencia de este Juzgado, sita en la
Casa Consistorial, provisto de su cédula
personal y pruebas de que intente
valerse, en el juicio declarativo ver-
bal contra él mismo interpuesto por
Angel Babarro Estevez, vecino de
Santa Baya parroquia referida de Cor-
noces, sobre pago de setecientos cua-
renta y siete reales y diez céntimos
como principal y rédito vencido; pues
así lo he acordado en providencia de
hoy, previniéndole que de no com-
parecer se seguirá el juicio en su rebel-
día, parándole el perjuicio á que haya
lugar en derecho.

Dado en Amoeiro á quince de Mar-
zo de mil ochocientos noventa y tres.
—Bernardo Carid.—El Secretario, In-
dalcio Rodriguez Castro.

ANUNCIOS

LA COMPAÑIA FABRIL SINGER

Orense.—Progreso, 36

MAQUINAS PARA COSER

Las seis grandes fábricas que tiene
establecidas en América y Europa la
Compañia Fabril SINGER y que ya
once millones de máquinas revela bien
á las claras la marcada predilección
que el público de ambos continentes
demuestra por las máquinas SINGER.

Entre los hermosísimos modelos que
dieron justa fama á esta fabricación
descuella la nueva *Lanzadera vibrante*.
Desprovista de engranes y de fácil
manejo, es la más ligera, la que mé-
nos ruido hace, la de más sencillo
mecanismo y con la que pueden eje-
cutarse primorosas labores.

A pesetas 2'50 por semana

Grandes descuentos al contado.

Comisionados para la venta y co-
bros en los principales pueblos de la
provincia.

CARRETES DE HILO

Torzales de seda.—Agujas, aceite.

Piezas sueltas y accesorios para toda
clase de costura.

Pídanse catálogos ilustrados que se
dan gratis.

AVISO

La persona que quiera adquirir se-
tenta y un ferrado y medio de cente-
no de renta y doscientos cincuenta
reales de censo en dinero cobrables en
el pueblo y parroquia de Gustey,
Ayuntamiento de Coles, cuatro moys
de vino tinto y ciento noventa y ocho
reales de censo cobrables en la ciudad
de Orense, se apersonará con don Ber-
nardo Guerrero, vecino de San Migue-
de Melias en dicha alcaldía de Coles
y en esta capital en los dias 7 y 8 de
cada mes, en la calle de los Hornos
número 4 sujeto encargado para ha-
cer dicha venta. 23-30

VIDES AMERICANAS

DE LOS

CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA

Los que deseen adquirir de estas
hermosas vides cuya resistencia contra
la filoxera y otras enfermedades crip-
togámicas está reconocida, pueden
remir sus pedidos al representante
en esta región D. Roberto Justo Novoa,
calle de Colon, núm. 20, Orense.

Conviene no descuidarse á evitar
que se agoten las existencias.

A LOS ENFERMOS

DE LOS OJOS



Llegó el re-
nombrado
especialis-
ta en las
enfermedades
de la
vista Don
M. Marban. Tiene su Clínica Oftalmo-
lógica en la calle de Hernán Cortés,
número 7.

Horas de consulta, desde las diez
de la mañana en adelante.

Coloca y vende ojos artificiales.

NOTA. En la primera visita se-
rán desengañados los que no tengan
remedio.—8.